

N/REF: 0001/2023

El proyecto de real decreto sometido a informe tiene por objeto la regulación del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (o REACU en lo sucesivo), su estructura y funcionamiento, así como las exigencias de acceso al mismo, tales como los requisitos mínimos de implantación territorial, el número de asociados y programas de actividades y el procedimiento de inscripción en este. También pretende regular las relaciones del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios con los restantes registros de asociaciones y demás órganos de la Administración, además de establecer su dependencia orgánica y las formas de acceso a la información de este.

Todo ello con el objetivo de dar seguridad jurídica a todo el régimen de inscripción en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, estableciendo de forma precisa los requisitos que deben cumplir.

En lo que a la materia de protección de datos personales se refiere, la norma a la que debe ajustarse el proyecto de Orden sometido a consulta es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD en lo sucesivo) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD en lo sucesivo).

I

El primer aspecto que debe analizarse es el relativo al ámbito subjetivo y el ámbito material de aplicación del RGPD y de la LOPDGDD aplicado al tratamiento de datos personales derivado de la aprobación y ejecución del proyecto de real decreto sometido a informe.

Conviene indicar que el RGPD extiende su protección, tal y como establece su artículo 1.2, a los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales, definidos éstos en su artículo 4.1 como *“toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o*

indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.”

Y en cuanto al tratamiento en sí mismo considerado, el artículo 4.2 del RGPD considera como «tratamiento»: *cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;*

En el Considerando 14 del RGPD se indica que (...) el presente Reglamento no regula el tratamiento de datos personales relativos a personas jurídicas y en particular a empresas constituidas como personas jurídicas, incluido el nombre y la forma de la persona jurídica y sus datos de contacto. (...)

Ahora bien, teniendo en cuenta los preceptos y las indicaciones puestas de manifiesto, debe señalarse que el ámbito protector del RGPD también se extiende a las personas físicas que representan a las entidades, al no establecer ninguna exclusión en este sentido, pues sus datos personales deben ser tratados en las relaciones que aquellas establezcan con terceros.

En este sentido en el Informe 4/2021, se indicaba que “quedan excluidas de la aplicación de la normativa sobre datos personales las personas jurídicas, pero su ámbito protector se extiende a las personas físicas que las representan, cuyos datos personales deben ser tratados con sujeción a lo previsto en el RGPD y la LOPDGDD”.

De igual modo procede citar lo indicado en la LOPDGDD en su artículo 19 al analizar el tratamiento de los datos de personas que prestan servicios en personas jurídicas, en concreto al analizar la base jurídica que legitima el tratamiento de datos personales de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales, y que bajo el paraguas del apartado 6.1 f) del RGPD (la presunción de la concurrencia de interés legítimo) permite el tratamiento de los datos de contacto de éstos, únicamente para localización profesional y para entablar relaciones con la persona jurídica en la que el afectado preste su servicios.

En el caso que se plantea en el proyecto de real decreto sometido a informe, el órgano encargado del registro necesita, lógicamente, realizar el tratamiento de datos personales de los representantes de las asociaciones de consumidores y

usuarios que vayan a causar alta en dicho registro, es decir, para entablar *relaciones* (administración pública-administrado) con la persona jurídica en cuestión.

No obstante lo anterior, es preciso señalar que esta presunción de interés legítimo de la LOPDGDD ex art. 19, no opera como base jurídica de legitimación de tratamiento en el supuesto que plantea el proyecto sometido a informe pues el artículo 6.1 RGPD excluye expresamente la concurrencia del interés legítimo para los tratamientos que se realicen por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, sin embargo es objeto de cita pues como se ha indicado antes, la finalidad para la que se van a tratar los datos personales de los representantes de las entidades, coincide plenamente con las expresadas en el precepto, que no es otra que para poder entablar los canales de comunicación necesarios en el procedimiento administrativo de la gestión de la tramitación del procedimiento de inscripción y de la gestión en si misma del registro una vez realizada la inscripción.

Asimismo, el tratamiento de datos personales de los representantes de las asociaciones, no sólo se deduce de los actos de comunicación en la tramitación del procedimiento de inscripción, sino que de la relación de actos inscribibles prevista en el artículo 11, y en la documentación a depositar que requiere el artículo 12, consta información susceptible de ser considerada como dato de carácter personal.

A lo que hay que añadir la figura del socio individual de pleno derecho que regula el artículo 10, que además de poder ser persona jurídica, también puede ostentar la cualidad de persona física.

Por último, indicar que también se produce tratamiento de datos de carácter personal, cuando se regula la publicidad y la forma de acceso al a información depositada, de acuerdo con el artículo 13, en la medida en que no sólo se producirá el tratamiento de datos con la expedición de los correspondientes certificados, nota simple informativa, etc.,. sino que la persona que solicite el acceso al mismo tendrá la consideración de interesada y en consecuencia sus datos personales también serán objeto de tratamiento por el encargado del registro a los efectos de tramitar la solicitud de acceso.

En consecuencia, la primera conclusión que se obtiene es que, **de la aplicación y ejecución del proyecto de real decreto sometido a informe, va a producirse tratamiento de datos personales resultando de aplicación tanto el RGPD como la LOPDGDD.**

II

Planteados los términos de la consulta, debe indicarse que para que un tratamiento de datos personales sea conforme al RGPD deben cumplirse, entre otros elementos del sistema de protección de datos, los principios de protección de datos contenidos en el artículo 5.1 del RGPD, a cuyo tenor los datos personales serán:

- a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»);
- b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);
- c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);
- d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);
- e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);
- f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).

III

En cuanto al principio de licitud, debe acudirse a lo indicado en el artículo 6 del RGPD y en concreto a lo dispuesto en el apartado 1 letras c) y e) a cuyo tenor:

1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;

El Considerando 45 del RGPD señala que “Cuando se realice en cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, o si es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, el tratamiento debe tener una base en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.”

Por su parte la LOPDGDD establece en su artículo 8 bajo la denominación Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos” dispone lo siguiente:

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.”

Teniendo en cuenta lo anterior, y a los efectos de determinar si la base jurídica del tratamiento que se deriva de la aprobación y ejecución del proyecto de real decreto sometido a informe es la prevista en el apartado c) o la prevista en el apartado e) del artículo 6.1 del RGPD, o lo son ambas, procede citar lo recogido en el **Informe 74/2019** dónde se destacaba la necesidad de deslindar

ambos conceptos, ya que no hacerlo así implicaría confundir, en la práctica totalidad de los casos de actuación de la Administración, ambas bases jurídicas, concluyendo que

Por ello, la base jurídica prevista en la letra c) del artículo 6.1. del RGPD será de aplicación en aquellos casos en los que una norma con rango de ley imponga a la Administración una obligación específica de dar, hacer o no hacer, que implique el tratamiento de datos de carácter personal, y diferente del deber jurídico genérico de la Administración de ejercer las potestades que el ordenamiento jurídico le atribuye para servir con objetividad al interés público (artículo 103 de la Constitución).

Sobre la base jurídica que legitima el tratamiento de datos por las administraciones en relación a los registros públicos que gestionan, esta Agencia se ha pronunciado con anterioridad, sirva citar a modo de ejemplo, lo recogido en el **Informe 5/2021** sobre el proyecto de Orden por la que se regula el Registro Electrónico General en el ámbito de la Administración General del Estado se indicaba que

Y el criterio que viene manteniendo reiteradamente esta Agencia, en relación con los registros administrativos, es que el tratamiento de los datos personales correspondientes se encontraría amparado por lo dispuesto en la letra e) del artículo 6.1. del RGPD: “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”, siempre que se haya establecido por una norma con rango de ley, conforme a lo señalado por el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: “El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley” (Informe 92/2020, en relación con el Registro de Variedades Protegidas y el Registro de Variedades Comerciales, el Informe 128/2018 sobre el registro unificado sobre certificados y centros de formación de gases fluorados o el informe 4/2021 relativo al registro electrónico de apoderamientos en el ámbito de la Administración General del Estado).

En el presente caso, siendo el procedimiento administrativo el “conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar

la voluntad de la Administración”, y siendo necesario dejar constancia de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo mediante el correspondiente asiento en el Registro electrónico General (artículo 16.1 de la Ley 39/2015) con el objeto de dejar reflejada, entre otras circunstancias, la fecha y hora de su presentación (artículo 16.3 de la Ley 39/2015), lo que tiene especial importancia, entre otros supuestos, a efectos del cumplimiento de los plazos notificar la resolución expresa en los procedimientos iniciados a instancia del interesado (artículo 21.3 de la Ley 39/2015) o para la suspensión de la ejecución de los actos administrativos recurridos (artículo 117.3 de la Ley 39/2015) y, en general, para dejar acreditada la recepción de cualquier documento que forma parte del procedimiento. Por consiguiente, el tratamiento de los datos personales de los interesados en el procedimiento y de sus representantes es necesario para dar cumplimiento a la obligación contemplada en el artículo 16.1., que exige específicamente que los asientos se hagan en el Registro electrónico general, así como para el adecuado desarrollo del procedimiento administrativo para que las Administraciones públicas puedan ejercer las potestades que tienen atribuidas, singularmente en su vertiente de garantía para el particular (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 1983) encontrando su legitimación, de este modo, en el artículo 6.1 letras c) y e) del RGPD.

Por su parte, en el **Informe 54/2021** referente al Proyecto de Orden Ministerial por la que se desarrolla el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital, se indicaba que:

En el presente caso, de los preceptos indicados se deduce, en primer lugar, que la creación del registro es obligatoria para la administración competente, es decir, el legislador ha creado un registro y atribuye su titularidad a un departamento ministerial concreto para el ejercicio de competencias propias, y en segundo lugar, en cuanto a la necesidad u obligatoriedad del tratamiento de datos personales para aplicar el apartado c) del artículo 6.1 RGPD, debe indicarse que, no estamos ante una obligación, *strictu sensu*, puesto que no se impone una obligación concreta a la administración del tratamiento de datos.

De la lectura de la disposición transitoria antes citada, se extrae la voluntariedad de la colaboración de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en la tramitación del IMV, que es el objeto de la regulación.

En efecto, las citadas entidades podrán o no, participar en dicha gestión, y una vez presentada la solicitud de inscripción, será obligatoria su

tramitación y por tanto tendrá lugar el tratamiento de datos personales de los representantes, pero dicha obligación de tratar los datos ya no descansará expresamente en una obligación legal de hacer, sino en el ejercicio del conjunto de potestades que se atribuyen al responsable del registro.

Por lo tanto, estamos ante un tratamiento de datos que resulta necesario para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

En conclusión, el principio de licitud previsto en el artículo 5.1 a) del RGPD se ha de entender cumplido por aplicación del apartado e) del artículo 6 del RGPD en relación con el artículo 8.2 de la LOPDGDD.

Pues bien, en el presente caso debe acudir a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU), establece en el Artículo 33 bajo la denominación “Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios” lo siguiente:

1. Las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal y todas aquéllas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito de una comunidad autónoma, deberán figurar inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios que se gestiona en el Instituto Nacional del Consumo.

Tras su denominación, estas asociaciones de consumidores y usuarios indicarán su número de inscripción registral.

2. El cumplimiento de los requisitos exigidos en los capítulos I y II de este título será condición indispensable para acceder a la inscripción en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, reglamentariamente se establecerán los requisitos mínimos de implantación territorial, número de asociados y programas de actividades a desarrollar que deberán acreditar las asociaciones de consumidores y usuarios para su inscripción en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

Como puede observarse la inscripción en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (REACU en lo sucesivo), resulta obligatoria para todas las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, y a su vez la gestión del registro se atribuye competencialmente al Instituto Nacional de Consumo, cuya

referencia debe entenderse hecha en la actualidad a la Dirección General de Consumo, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.2.d) del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, al señalar que a dicha Dirección General le compete el registro de las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito supra autonómico.

Asimismo, es preciso indicar que norma afecta al derecho de participación de las personas consumidoras, de forma colectiva, en cuentas cuestiones puedan afectarles, tal como recoge el artículo 51.2 de la Constitución. A lo que debe añadirse que entre los beneficios de las asociaciones inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios se encuentran la legitimación para actuar en nombre y representación de los intereses generales, colectivos y difusos de los consumidores, el acceso a ayudas y subvenciones públicas, el disfrute del beneficio de justicia gratuita o la integración en el Consejo de Consumidores y Usuarios, órgano nacional de consulta y representación institucional de los consumidores y usuarios a través de sus organizaciones.

Teniendo en cuenta lo indicado, sobre la posible aplicación del artículo 6.1 c) RGPD, debe recordarse que la obligación que legitime el tratamiento debe recaer en el responsable del tratamiento, en este caso, la Dirección General de Consumo, y de la lectura del precepto no se deduce la misma. Es decir, la inscripción en el registro es obligatoria para las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, y para la administración pública, lo que subyace para dar cumplimiento a aquella obligación, es el ejercicio de una competencia que le atribuye la norma.

En consecuencia, **el tratamiento de datos personales que se deriva de aplicación del proyecto de real decreto sometido a informe, encontraría su legitimación preferentemente en el apartado e) del artículo 6.1 RGPD**, es decir, en la medida en que estamos ante el ejercicio de una competencia atribuida por ley al responsable del tratamiento para cumplir una misión de interés público, derivado de la satisfacción del interés general de la que son acreedores las asociaciones de consumidores y usuarios ya que la inscripción posibilita la existencia de estas y en consecuencia el cumplimiento de sus cometidos.

IV

Otro aspecto que abordar es la adecuación al principio de transparencia en el tratamiento de datos y el derecho a la información que se deriva de la aplicación del proyecto de real decreto.

El Considerando 39 del RGPD determina lo siguiente: Para las personas físicas debe quedar totalmente claro que se están recogiendo, utilizando, consultando o tratando de otra manera datos personales que les conciernen, así como la medida en que dichos datos son o serán tratados. El principio de transparencia exige que toda información y comunicación relativa al tratamiento de dichos datos sea fácilmente accesible y fácil de entender, y que se utilice un lenguaje sencillo y claro. Dicho principio se refiere en particular a la información de los interesados sobre la identidad del responsable del tratamiento y los fines del mismo y a la información añadida para garantizar un tratamiento leal y transparente con respecto a las personas físicas afectadas y a su derecho a obtener confirmación y comunicación de los datos personales que les conciernan que sean objeto de tratamiento. Las personas físicas deben tener conocimiento de los riesgos, las normas, las salvaguardias y los derechos relativos al tratamiento de datos personales, así como del modo de hacer valer sus derechos en relación con el tratamiento. En particular, los fines específicos del tratamiento de los datos personales deben ser explícitos y legítimos, y deben determinarse en el momento de su recogida

Por su parte el artículo 12 del RGPD en su apartado 1, lo siguiente:

1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.

El artículo 12 del RGPD regula de qué modo o manera se debe proporcionar la información, es decir, qué características o cualidades debe tener la información que se ofrece a los titulares de los datos que van a ser objeto de tratamiento.

Determina el artículo 13 del RGPD lo siguiente:

1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:

a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;

b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;

c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;

d) cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable o de un tercero;

e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;

f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado.

2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:

a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;

b) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;

c) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;

d) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

e) si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos;

f) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

3. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente a tenor del apartado 2.

4. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables cuando y en la medida en que el interesado ya disponga de la información.

Como puede observarse, el precepto muestra el contenido material de la información. Es decir, qué elementos debe contener la información que se ofrezca al titular de los datos que van a ser objeto de tratamiento.

Por su parte, la LOPDGDD en su artículo 11, bajo la rúbrica “Transparencia e información al afectado” determina lo siguiente:

1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:

a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.

b) La finalidad del tratamiento.

c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

El artículo 11 de la LOPDGDD, establece la posibilidad de instaurar un sistema de información por capas, diferenciando una primera información básica y permitiendo la remisión a otro espacio informativo dónde el interesado que lo desee pueda consultar con más amplitud todo lo relativo al tratamiento de sus datos personales.

Teniendo en cuenta el Considerando del RGPD y los preceptos que se acaban de indicar, en el presente caso se puede afirmar que, a grandes rasgos, se producen dos tratamientos diferenciados que requieren también del cumplimiento del principio de transparencia y el derecho a la información, y son, de un lado, los datos personales de los representantes de las asociaciones, y socios de pleno derecho que van a inscribirse en el REACU y de otro, los datos personales de aquellas personas interesadas en acceder a la información del REACU.

Pues bien, respecto de los primeros el artículo 22 del proyecto de real decreto, bajo la rúbrica “Presentación de Solicitudes” indica lo siguiente:

1. Las solicitudes de inscripción y su documentación se deberán presentar a través de los medios electrónicos previstos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
2. La documentación que, en su caso, deba acompañarse junto con la solicitud podrá ser original o copia auténtica.

Y respecto de los segundos, el artículo 13 bajo la denominación “Publicidad y forma de acceso a la información depositada” indica lo siguiente:

1. La publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos, nota simple informativa, copia de los asientos o de los documentos depositados y a través de listados. Igualmente, se podrá hacer efectiva la publicidad mediante la

exhibición de los asientos y de los documentos, previa comparecencia de las personas interesadas en la sede del Registro en relación con la información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

2. Respecto de las solicitudes de acceso a información que afecten, aunque sea parcialmente, a datos personales reseñados en los asientos o en los documentos, incluidas las resoluciones judiciales que, en su caso, consten en los expedientes, el Registro velará por el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo.
3. La exhibición de los asientos y de los documentos depositados mediante comparecencia del interesado en la sede del registro exigirá la previa solicitud de persona interesada, presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles, en la forma prevista en 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dirigida al órgano encargado de la gestión del Registro, y se realizará siempre en presencia del personal competente.
4. A los efectos del párrafo anterior, la persona interesada deberá concretar en la solicitud los criterios de selección de la información a la que se desea acceder, no admitiéndose las solicitudes genéricas o que pretendan un volcado de todos los datos del Registro.
5. El Registro podrá facilitar información sobre las asociaciones mediante la emisión de listados en los que se hará constar la denominación de las asociaciones, su número nacional de inscripción y domicilio social.
6. No se admitirán las solicitudes de acceso a los asientos y documentos depositados:
 - a) Que se refieran a información de asociaciones que estén en proceso de inscripción o exclusión.
 - b) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la publicidad de los asientos.

7. En relación con el acceso a la información depositada, el Registro velará por el cumplimiento de las normas vigentes respecto de las solicitudes de acceso a la documentación.

Como puede observarse en ambos preceptos, y sin perjuicio de lo indicado en el apartado 2 del artículo 13 que más adelante se analiza, **nada consta en respecto del cumplimiento de los requisitos que se derivan del principio de transparencia y del derecho a la información previsto en los artículos 12 y 13 del RGPD.**

En este aspecto hay que destacar que si bien el artículo 13.4 RGPD dispensa de la obligatoriedad de proporcionar la información cuando el interesado ya disponga de la información, y el Considerando 62 del RGPD matiza que *Sin embargo, no es necesario imponer la obligación de proporcionar información cuando el interesado ya posea la información, cuando el registro o la comunicación de los datos personales estén expresamente establecidos por ley, o cuando facilitar la información al interesado resulte imposible o exija un esfuerzo desproporcionado*, en el presente caso de la regulación legal que se hace en el artículo 33.1 del TRLGDCU, que precisamente exige un desarrollo reglamentario, no puede estimarse que el concreto tratamiento de datos que se deriva de la aplicación de los artículos 10, 11 y 12 dada su amplitud, se prevea o se deduzca ni si siquiera de manera indirecta de dicho precepto.

Por tanto la obligación de informar en los términos del artículo 13 RGPD se mantiene incólume, y no puede verse suplida por la referencia genérica que se hace a “la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas”, que se hace en el artículo 22.1 del proyecto de real decreto y tampoco por lo indicado en el artículo 13.2 del proyecto de real decreto que parece estar más dirigido a la salvaguarda de la protección de datos de la información a la que se pretende acceder, que al derecho de información sobre el tratamiento de los datos de la persona que pretende llevar a cabo dicho acceso.

En consecuencia, **se estima necesario que en el texto de la norma se garantice por parte del responsable del tratamiento que va a darse cumplimiento al deber de información previsto en el artículo 13 del RGPD.**

V

En cuanto al cumplimiento de los restantes principios recogidos en el artículo 5 del RGPD, debe hacerse especial referencia, además del principio de licitud, al de limitación de la finalidad y de minimización de datos, recogidos en las letras b) y c), que indican que los “datos personales serán:

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);

En primer lugar, procede abordar la aplicación de estos principios al tratamiento de datos personales que se deriva de la inscripción en el registro.

Como se ha indicado antes, de los artículos 10, 11 y 12 se infiere la recogida de datos de carácter personal, tanto de representantes de las asociaciones, como de los miembros de la junta directiva, o los socios de pleno derecho.

Sin embargo, para hacer un juicio de adecuación a los principios de minimización y limitación de la finalidad en relación con la información necesaria para la tramitación de la inscripción, y posterior gestión del registro, debe indicarse que son cuestiones que responden al juicio técnico del órgano responsable de dicha gestión, y que responden a criterios vinculados a una materia y especialidad concreta que esta Agencia desconoce y que impiden un pronunciamiento al respecto. Lo que no obsta a que la justificación de los mismos se haga constar en la correspondiente Memoria de Análisis de Impacto Normativo. (MAIN)

En segundo lugar, procede abordar la aplicación de estos principios al tratamiento de datos que deriva del acceso al mismo y de los medios para hacer efectiva la publicidad del registro, desde una doble perspectiva, la información que se hace pública en el registro, y la información que puede solicitarse a la persona que pretende el acceso.

Partiendo de la finalidad que se busca con la creación del registro y la obligatoriedad de su inscripción que no es otra que dar publicidad a las asociaciones de consumidores y usuarios, ofrecer seguridad jurídica tanto a las propias organizaciones de consumidores como a la ciudadanía que pretenda participar en ellas o utilizar los medios que ponen a disposición para la defensa de los consumidores, se consideran adecuados y proporcionales, desde la perspectiva del derecho a la protección de datos y los principios de minimización y limitación de la finalidad, los medios a través de los cuales se materializa la publicidad, como son los asientos, la nota simple informativa, copia de los asientos o de los documentos depositados, a través de listados, o

incluso mediante la exhibición de los asientos y de los documentos previa comparecencia de las personas interesadas, se consideran respetuosas con dichos principios.

Ahora bien, se considera una práctica recomendable, incluir en la documentación que se expida por el registro y que recoja o materialice las fórmulas indicadas, que se informe a los solicitantes de acceso a la información que contenga datos personales, de las limitaciones que se derivan de la normativa de protección de datos, en especial, al cumplimiento del principio de licitud y de limitación de finalidad con el objeto de informar que el uso de la información que contenga datos personales para una finalidad distinta a la que sirve la publicidad registral, podría considerarse contrario a dicho principio y que en cualquier caso debería contar con una base jurídica adecuada para llevar a cabo cualquier tratamiento de datos distinto.

Como garantías que se deducen del artículo analizado, se valora positivamente la inclusión en el apartado 2 de la referencia al cumplimiento del RGPD y de la LOPDGDD, sin perjuicio del análisis que más adelante se realiza, y también lo indicado en el apartado 4 del artículo 13, la limitación sobre el uso de solicitudes genéricas que pretenda un volcado de todos los datos del Registro.

Respecto de la aplicación de estos principios al tratamiento de los datos personales de la persona que pretende el acceso, debe indicarse que dada la ausencia de previsión sobre este tipo de tratamiento en el proyecto de real decreto, la solicitud de acceso debería cumplir lo dispuesto con carácter general en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en especial lo indicado en su artículo 9 sobre los “Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento” y en el artículo 66 referido a las “Solicitudes de iniciación”, con la observancia de lo dispuesto en el artículo 13. h) que reconoce el derecho a la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

Es decir, el contenido de la solicitud de acceso debería cumplir, al menos, dichos extremos, e informar de los aspectos previstos en el artículo 13 del RGPD como se ha indicado anteriormente.

VI

Siguiendo con los principios de protección de datos previstos en el artículo 5 del RGPD, conviene traer a colación el previsto en el apartado f) referido a que los datos serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento

no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»). Relacionado con dicho principio procede citar lo dispuesto en el artículo 24 y 32 del RGPD.

Dispone el artículo 24.1 del RGPD bajo la denominación “Responsabilidad del responsable del tratamiento” lo siguiente:

1. Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente Reglamento. Dichas medidas se revisarán y actualizarán cuando sea necesario.

Dispone el artículo 32 del RGPD bajo la denominación “Seguridad del tratamiento” lo siguiente:

1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:

- a) la seudonimización y el cifrado de datos personales;
- b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
- c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;
- d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

2. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.

(...)

4. El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

En relación al riesgo para los derechos y deberes de los titulares de los datos, el Considerando 75 indica que:

Los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas, de gravedad y probabilidad variables, pueden deberse al tratamiento de datos que pudieran provocar daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales, en particular en los casos (...) en los que los datos personales tratados revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la religión o creencias filosóficas, la militancia en sindicatos y el tratamiento de datos genéticos, datos relativos a la salud o datos sobre la vida sexual, o las condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas; (...) o en los casos en los que el tratamiento implique una gran cantidad de datos personales y afecte a un gran número de interesados.

Relacionado con la gestión y análisis de riesgos, procede traer a colación la obligación que se deriva del artículo 35 del RGPD, referida a la “Evaluación de Impacto relativa a la protección de datos”, que el Delegado de Protección de Datos del consultante en el apartado 7.8 de la MAIN ha considerado que no procede la realización de dicha evaluación.

Pues bien, procede citar el criterio de esta Agencia sobre la necesidad de realizar el análisis de riesgos y en su caso, evaluación de impacto para su inclusión en las disposiciones de carácter general que impliquen tratamientos de datos personales.

En efecto, el Informe 92/2022 nos indica que:

A este respecto, se recuerda que el criterio que viene sosteniendo esta Agencia para la adecuada aplicación del RGPD y la doctrina jurisprudencial respecto de las normas legales que legitiman el tratamiento de datos personales, como pueda ser en el caso de los registros públicos, se basa en la previa realización de un análisis de riesgos y, en su caso, una evaluación de impacto en la protección de datos que permita identificar las garantías adicionales para la protección de los derechos y libertades de los afectados, de modo que puedan

incluirse en dichos preceptos legales disposiciones específicas y garantías adicionales que faciliten el pleno cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales.

En el Informe 86/2022 se indica lo siguiente:

Para el adecuado establecimiento de dichos límites y la correcta identificación de las garantías que deban trasladarse al texto legal, esta Agencia viene recomendando repetidamente en sus informes que el prelegislador, en aquellos casos, como el presente, en que los tratamientos tienen como base jurídica el art. 6.1.c) o e) del RGPD (esto es, tratamientos cuya base es una obligación legal o una misión de interés público), y venga establecida por el Derecho de la Unión o en el Derecho del Estado miembro que se aplique al responsable del tratamiento y tal Derecho regule la operación específica de tratamiento o conjunto de operaciones en cuestión, realice un análisis de riesgos y, en su caso, haga uso de la posibilidad que establece el art. 35.10 RGPD de modo que sea el propio órgano proponente de la disposición general, en el curso del procedimiento de creación de la disposición de la norma quien realice una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) como parte de una evaluación de impacto general en el contexto de la adopción de dicha base jurídica.

Dicha EIPD habrá de incorporarse, como permite -casi debería decirse que lo impone, pero en cualquier caso no lo prohíbe- el art. 2.1, letra g), del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN). Este precepto es, además, suficientemente expresivo de la voluntad del legislador de incluir en la MAIN, dentro del concepto “Otros impactos”, el análisis del “impacto que tendrá para la ciudadanía y para la Administración el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital que conlleve la norma”.

g) Otros impactos: La memoria del análisis de impacto normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente, prestando especial atención a los impactos de carácter social y medioambiental, al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y al impacto que tendrá para la ciudadanía y para la Administración el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital que conlleve la norma

Dicha EIPD no se ha llevado a cabo por el órgano proponente de la disposición general, o cuando menos, no se ha aportado a esta AEPD. Su realización permitiría que los responsables o encargados del tratamiento, una vez promulgada la norma, no tendrían la obligación de realizar dicha evaluación de impacto de datos personales (EIPD) prescrita en el art. 35 RGPD (y que el Real Decreto del ENS ha considerado asimismo obligatoria) precisamente por haberse llevado ya a cabo en el seno del proceso de gestación de la norma de carácter general.

Esta Agencia recuerda, asimismo, que el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) establece que la política de seguridad del sistema de información deberá examinar y tener en cuenta “los riesgos que se derivan del tratamiento de los datos personales” (art. 12.1.f)), así como que en caso de que los sistemas de información traten datos personales (como es el caso), en todo caso, prevalecerán las medidas a implantar como consecuencia del análisis de riesgos y, en su caso, de la evaluación de impacto en caso de resultar agravadas respecto de las previstas en el citado real decreto (art. 3.3).

Teniendo en cuenta lo que se acaba de indicar, en el presente caso en la MAIN que se incorpora a la consulta, si bien hay una referencia a los riesgos y a la evaluación de impacto en materia de protección de datos en el apartado 7.8 bajo la rúbrica “Otros Impactos”, no se comparte las conclusiones a las que se llega referidas a la no necesidad de realizar la evaluación de impacto a la que se refiere el artículo 35 del RGPD, indicándose expresamente lo siguiente:

En el informe emitido por el Delegado de Protección de Datos del Ministerio de Consumo se concluyó que no procedía realizar una Evaluación de Impacto sobre los tratamientos de datos llevados a cabo por esta norma ya que, aunque implique el uso de datos a gran escala por su alcance geográfico, estos no suponen un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. Asimismo, se informó favorablemente la norma puesto que, en la misma, se hacen menciones correctas en materia de protección de datos.

Pues bien, debe tenerse en cuenta la previsión normativa que realiza el propio RGPD sobre la necesidad de abordar una evaluación de impacto que se prevé en el artículo 35.3 b):

3. La evaluación de impacto relativa a la protección de los datos a que se refiere el apartado 1 se requerirá en particular en caso de:

b) tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos a que se refiere el artículo 9, apartado 1, o de los datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10, o (...)

Por su parte, la propia LOPDGDD en su artículo 28 bajo la denominación “obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento” dispone que:

1. Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. En particular valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta previa a que se refiere la Sección 3 del Capítulo IV del citado reglamento.

2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior los responsables y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse en los siguientes supuestos: (...)

c) Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las categorías especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 y 9 y 10 de esta ley orgánica o de los datos relacionados con la comisión de infracciones administrativas. (...)

f) Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados o conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales.

En este sentido es preciso recordar el tratamiento de datos que se prevé en el REACU, previsto en el artículo 12 i) referido a la documentación

Las resoluciones judiciales que afecten a actos susceptibles de constancia registral, una vez hayan adquirido firmeza

Y relacionado con lo anterior, lo indicado en el artículo 28 referido a las inscripciones de oficio relativas a “Resoluciones Judiciales”, a cuyo tenor:

1. Sin perjuicio de la inscripción que le sea ordenada por el órgano judicial, el Registro anotará el tipo de resolución que le sea comunicada, la

fecha, la autoridad que la ha dictado y el contenido del fallo o parte dispositiva.

2. La inscripción de la suspensión de actividades acordada mediante resolución judicial firme conllevará el cierre provisional de la hoja registral.
3. La inscripción de la disolución acordada mediante resolución judicial firme conllevará la cancelación de todos los asientos de la asociación y el cierre definitivo de su hoja registral.

Es decir, de la lectura de ambos preceptos se deriva que el tratamiento que se deriva de la aplicación de la norma prevé el tratamiento de datos personales a los que se refiere el artículo 10 del RGPD y artículo 10 de la LOPDGDD, y en ocasiones, de infracciones administrativas de las previstas en el artículo 27 de la LOPDGDD, debiendo recordar que respecto de la naturaleza de las infracciones administrativas, la STJUE de 22/6/2021, C-439/19, sobre concepto de "infracciones penales" del art. 10 RGPD, viene a indicar que no se refiere sólo a "delitos" según el derecho nacional de cada Estado miembro, sino que es un concepto autónomo de la UE.

Dicho de otro modo, el proyecto de real decreto prevé que se inscriban resoluciones judiciales que afecten a las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el REACU, que, si bien pueden ser de distintos órdenes jurisdiccionales, como el civil, o el contencioso-administrativo, también se inscriban resoluciones que contengan datos de naturaleza penal.

Lo que junto a la dimensión geográfica y en su caso, de volumen de datos tratados, **hace que sea necesaria la realización de una evaluación de impacto, de acuerdo con el artículo 35.3 b) del RGPD y el artículo 3.2 y 3 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el ENS. Y que permita identificar los riesgos derivados del tratamiento para los derechos y libertades de los afectados, incluidos los referidos a la seguridad de los datos y trasladar, en su caso, a la norma las garantías específicas oportunas.**

Por lo tanto, en este aspecto se comparte la conclusión a la que se llega en el Informe 86/2022 antes citado:

En definitiva, esta AEPD recomienda que se lleven a cabo, y se incorporen a la MAIN el análisis de riesgos (art. 24 RGPD) y, en su caso, la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (art. 35 RGPD), lo que permitirá, a la vista de ello, al propio prelegislador, determinar no sólo las medidas de seguridad necesarias en los sistemas de información, sino las garantías específicas que se requieran para

afrontar los riesgos derivados del tratamiento de los datos (ver art. 35.7.d) RGPD).

Corresponde, cabe recordar, al responsable del tratamiento, en virtud del principio de responsabilidad proactiva (art. 24.1 RGPD) el establecimiento de las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente Reglamento, teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, y que ello habrá de hacerlo “desde el diseño” del tratamiento (art. 25.1 RGPD), integrando las garantías en el tratamiento, y ello aconsejaría que las garantías para minimizar los riesgos, una vez conocidos y ponderados en la EIPD tras el análisis de riesgos, se incorporen a la propia norma.

VII

Como se ha indicado antes, en el artículo 13.2 del proyecto sometido a informe se hace una referencia al cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, en concreto se hace constar lo siguiente:

Respecto de las solicitudes de acceso a información que afecten, aunque sea parcialmente, a datos personales reseñados en los asientos o en los documentos, incluidas las resoluciones judiciales que, en su caso, consten en los expedientes, el Registro velará por el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo.

Ahora bien, esta es la única referencia que se hace a esta normativa y se infiere que va dirigida únicamente a la salvaguarda de los datos que consten en el registro, obviando el texto del articulado que también se produce el tratamiento de datos personales de la persona solicitante del acceso a la información, y de los representantes de las asociaciones que se vayan a inscribir, en la medida en que sus datos también se recogen y con la gestión ordinaria del registro y al margen del acceso por terceros, sus datos van a ser sometidos a tratamiento.

En consecuencia, para dar coherencia y uniformidad a la referencia al cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, se propone

que la estructura y sistemática del texto normativo sea modificada, de tal modo que si bien se mantenga la referencia del artículo 13.2, dado el alcance que debe tener la normativa de protección de datos personales en relación con que el tratamiento se produciría en múltiples estadios a la hora de aplicar el real decreto y no sólo en lo relativo a regular el acceso por terceros al registro, **se incluya en el apartado 4 referido a “Principios de actuación”, otro apartado adicional bajo la letra f) denominado “Protección de datos de carácter personal”** con el siguiente texto:

f) Protección de datos personales: Respecto a la constitución y funcionamiento del Registro y en particular en el acceso a los datos de carácter personal, se observarán las previsiones que establecen el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y las contenidas en el artículo 13.d) y h) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»

De este modo, al incluir la referencia a los apartados d) y h) del artículo 13 de la LPACAP, se dota de la transversalidad necesaria a la aplicación de la normativa de protección de datos a cualquier tratamiento de datos personales que se derive de la aplicación del proyecto de real decreto sometido a informe, ya sea desde la perspectiva del titular de los datos que son objeto de registro, como desde la perspectiva de la persona que pretende acceder a la información que consta en dicho registro.